

PROPIOS, ARBITRIOS Y COMUNALES: LA HACIENDA MUNICIPAL EN EL REINO DE ARAGÓN DURANTE LOS SIGLOS XVI Y XVII *

JOSÉ ANTONIO MATEOS ROYO

Universidad de Zaragoza

RESUMEN

Este trabajo analiza la composición y administración de la hacienda municipal en el reino aragonés durante los siglos XVI y XVII. Favorecidos por el auge económico del Quinientos, los concejos alumbraron significativos proyectos en su afán de transformar las relaciones entre el hombre y el paisaje, potenciar las actividades económicas o manifestar su poder público. El progresivo endeudamiento generado por esta gestión provocó la quiebra de las haciendas municipales en el Seiscientos. Sus dificultades financieras, agudizadas por las demandas fiscales de la monarquía en el segundo cuarto de la centuria, impondrán a las autoridades municipales allegar más ingresos. La bancarrota final de los municipios aragoneses conferirá el control de propios y comunales a Juntas de censalistas, con una fuerte presencia del estamento eclesiástico.

ABSTRACT

This paper studies the composition and administration of municipal finances in the Kingdom of Aragon during the sixteenth and seventeenth centuries. Economic prosperity during the sixteenth century allowed town councils to

N. de E.: Fecha de recepción del artículo: enero, 2002.

Fecha de aprobación por el Consejo de Redacción: enero, 2003.

* Este trabajo se enmarca dentro del proyecto PO20/2000, titulado «La acción de los poderes públicos y el desarrollo del mercado en Aragón (siglos XVII y XVIII)». El autor agradece los comentarios de Guillermo Pérez Sarrión, José Antonio Salas y Fernando Zulaica, así como de dos evaluadores anónimos de la *Revista de Historia Económica*.

Revista de Historia Económica
Año XXI, Invierno 2003, N.º 1.

carry out significant projects in order to transform the terms between man and landscape, to expand economic activities or to increase the public power. As a result of this administration, raising indebtedness during the seventeenth century caused the bankruptcy of town councils. Their financial difficulties were sharpened by the fiscal demands from the monarchy during the second quarter of this century and imposed to municipal authorities the increase of incomes. Final bankruptcy of town councils in Aragon will transfer the control of *propios* and communal lands to Juntas composed by creditors and an important representation of clergymen.

JEL Classification: H39, H63, H71, H72.

INTRODUCCIÓN

De forma fehaciente, pocos temas en la Historia económica de España combinan una importancia tan destacada con un tratamiento tan parcial como el análisis de las haciendas municipales durante el Antiguo Régimen. Las causas de este desentendimiento por los investigadores han sido varias. Los estudios sobre concejos han dado primacía a la descripción del aparato político, la composición de las oligarquías y sus relaciones con la monarquía durante la creación del Estado Moderno. Al margen de algunas obras pioneras, la atención por las finanzas municipales no despertó hasta fines de los años setenta del siglo XX para crecer con moderación en las dos décadas siguientes¹. Con todo, muchos de estos trabajos fueron planteados como una tarea complementaria al estudio institucional realizada mediante catas, datos sueltos y apreciaciones de la época. Este enfoque explica el mayor interés dispensado a los concejos de realengo sobre los de señorío, o a las grandes ciudades sobre las pequeñas poblaciones rurales. Incluso al abordarse la gestión económica municipal, los estudios sobre hacienda han conocido idéntica relegación. Si bien se han elaborado trabajos notables sobre la política de abastos —en especial de trigo—, la fiscalidad real y la privatización de bienes comunales, éstos han sido elaborados por lo común con completa independencia del análisis estricto de la hacienda municipal. La necesaria elaboración de costosos estudios locales, cuyo valor general podía ser discutido con relativa facilidad, y la falta de una metodología de trabajo que permitiera contrastar investigaciones y realizar sólidas síntesis orientó muchos esfuerzos en otras direcciones. La dificultad

¹ La principal bibliografía existente sobre la hacienda municipal en la España Moderna puede consultarse en Passola (1997), pp. 139-152, y en Gutiérrez Alonso (1997). El predominio de los estudios fiscales sobre los hacendísticos puede comprobarse en AAVV (1988), y en Fortea y Cremades (1993).

de hallar series contables constantes, homogéneas y precisas, unida al uso en época medieval y moderna de criterios de registro distintos a los actuales, han favorecido que muchos análisis desestimen una necesaria labor de reorganización de los datos. Como resultado, la mera descripción de gastos y —sobre todo— ingresos ha predominado sobre la explicación de la gestión global concejil. A consecuencia de estos problemas, hubo historiadores que incluso dudaron del valor de la contabilidad municipal como fuente histórica ².

El precio pagado por esta aproximación tan parcial al tema ha sido la carencia de valoraciones ajustadas sobre la gestión de la hacienda municipal durante el Antiguo Régimen y el frecuente recurso al tópico, como demuestra la amplia aceptación tácita de su naturaleza corrupta e ineficaz o la responsabilidad primordial de la fiscalidad real en el endeudamiento de los concejos sin aportar a menudo las pruebas suficientes. Efecto añadido, ha obstaculizado concebir dicha administración como sujeta a una evolución, unida a cambios políticos y sociales en el plano local, así como percibir sus conexiones con serias transformaciones estructurales en la economía preindustrial. De acuerdo con estas consideraciones, expondré en el presente trabajo, a partir de estudios ya existentes, una reinterpretación del devenir de las haciendas municipales en Aragón durante la época foral moderna. Este enfoque asume la necesidad de un adecuado conocimiento del entramado político y jurídico, social y cultural, para valorar las decisiones económicas asumidas por instituciones públicas como los municipios. La perspectiva regional adoptada permitirá comprender mejor la compleja interrelación de todas estas variables e indicar soluciones o perspectivas de trabajo que puedan adaptarse al análisis de otros territorios.

Nuestro cometido es el estudio del carácter de las haciendas municipales aragonesas y su evolución en el período foral moderno para evaluar su gestión y explicar las causas de su quiebra. La negociación de la deuda censal revelará las estrategias de las elites dirigentes e instituciones involucradas, y su precio para el común de la población. Además, el análisis de la hacienda aportará nuevas vías de interpretación a aspectos de la gestión municipal analizados por los historiadores de forma independiente. Se demuestra así que el endeudamiento de los concejos en Aragón antecede y condiciona a la presión fiscal ejercida por la monarquía durante el siglo XVII. Su quiebra provoca asimismo pérdidas en el control sobre propios

² Por sus repercusiones, merecen destacarse las apreciaciones de Casey (1983), pp. 161-162.

y comunales no sólo por parte del común, sino entre las élites locales con claras repercusiones sobre su gestión y parcial privatización. Gran interés encierra la hipótesis que vincula el declive económico de las haciendas municipales durante el siglo XVII a la progresiva integración de los mercados locales en los ámbitos regional y estatal, con especial nitidez en el comercio de grano, al hacer disminuir el control de los concejos sobre los intercambios³. Planteamiento poco explorado en otras regiones, se prueba la influencia combinada de la doctrina jurídica y la política de abastos —en distinto grado durante ambas centurias— tanto en la fiscalidad municipal aplicada sobre los alimentos básicos como en la evolución de sus precios.

1. LA HACIENDA MUNICIPAL EN ARAGÓN DURANTE LA ÉPOCA FORAL MODERNA: RASGOS GENERALES

Resulta una tarea compleja realizar una caracterización general de las haciendas municipales aragonesas⁴. A la amplia diversidad de situaciones concretas se unen los limitados estudios existentes y los distintos criterios utilizados, con una marcada preferencia por el análisis de los núcleos de mayor tamaño en perjuicio de las pequeñas localidades. Por estos motivos, estimo conveniente ceñirme a exponer una serie de líneas maestras en función de su interés para la evolución del concejo aragonés.

De forma preliminar, debe recalcarse la escasa entidad demográfica dominante en la mayoría de los municipios aragoneses⁵. Según el recuento general del reino realizado entre 1646 y 1650, sólo Zaragoza superaba los 5.000 fuegos, Calatayud y Huesca los 1.000, seis concejos más alcanzaban los 500 y otros veintiocho los 200 hogares. El resto de la población aragonesa hasta sumar 70.676 fuegos se agrupaba en más de 1.500 núcleos por debajo del millar de habitantes. Fruto de su modesto tamaño, la organización económica municipal adoptaba esquemas simples. La hacienda era confiada cada año a un oficial, dotado de cierto nivel económico y fiadores solventes, que era designado en los principales concejos por insa-

³ Prueba de su importancia, la *Revista de Historia Económica e Historia Agraria* han acogido en este último quinquenio notables trabajos dedicados a la integración de mercados regionales en España durante las Edades Moderna y Contemporánea. Para una revisión bibliográfica, Llopis y Jerez (2001), pp. 15-18.

⁴ Para una aproximación al tema, Salas (1992b).

⁵ Sobre las características de la población aragonesa en los siglos XVI y XVII, Salas (1988) y (1992a).

culación. Su autonomía era limitada al recaer la decisión sobre los gastos de mayor cuantía en el concejo o en algunos de sus oficiales. Excluido del arriendo de propios municipales, su actuación era revisada por contables al finalizar su mandato.

Frente a esta línea de simplicidad impuesta por el limitado peso demográfico y heredada de la Baja Edad Media, el auge municipal del Quinientos introduce la creación de administraciones subsidiarias de la caja central, vinculadas en su mayoría a la política de abastos⁶. La institución emblemática es la Cámara del Trigo o Pósito, del cual se dotan no sólo las ciudades, sino muchas villas y lugares de reducido tamaño. Con carácter más temporal y fruto de un pacto social más amplio, pero con fuerte presencia municipal, fueron fundadas Juntas para gestionar Obras Públicas de gran calado, en parte financiadas entre mediados del siglo XVI y principios del siglo XVII con fondos de la Diputación.

Al margen de que estas cajas subsidiarias ligadas al abasto —Pósitos, Cámaras de Aceite— generasen su propio esquema administrativo, su gestión dependía siempre de la caja central, denominada Mayordomía, Bolsería, Procuraduría General, Clavería, etcétera. Esta administración principal aportaba durante el siglo XVI las sumas iniciales para fundar las restantes y enjugaba sus pérdidas mediante la contratación de censales. Bien se tratase de una única administración —como era frecuente en los municipios más modestos— o contase con otras secundarias, el análisis de la caja central resulta primordial para revelar las principales fuentes de financiación del concejo, así como la orientación de sus gastos.

La conformación de los ingresos municipales de esta caja central refleja múltiples variantes⁷. De forma lógica, los cequiajes o alfardas tenían mayor peso en los núcleos con amplias extensiones de regadío que allí donde predominaba el secano. Diversos concejos situados en el valle del Ebro dotados de amplios alfoces convertían el arriendo de sus pastos en un lucrativo negocio. En general, los monopolios y corretajes sobre la venta al por menor de alimentos de primera necesidad —carne, tocino, pescado, pan, vino, aceite— constituían el núcleo esencial de las finanzas municipales durante el siglo XVI. Tras percibir por tres años sisas o contribuciones sobre la venta de trigo y carne destinadas al pago del servicio al monarca votado en Cortes, los concejos de realengo podían recaudarlas gracias a un pri-

⁶ Para el análisis de estas administraciones, Mateos (1998) y (s.f.a.).

⁷ Sobre el tema, Salas (1992b). Para su comparación con los ingresos municipales en las Coronas de Aragón y Castilla, AAVV (1988); Bernabé (1993), pp. 15-31, y Gutiérrez Alonso (1997), pp. 189-199.

vilegio foral durante otros tres para fines propios, mientras en los dominios laicos o eclesiásticos correspondían al señor temporal. Resultado probable de la existencia de aduanas fronterizas regidas por la Diputación del reino, los corretajes sobre las restantes mercancías, los peajes y los pontazgos rara vez proporcionaban ingresos considerables a los municipios. El cobro de multas o derechos judiciales reportaba sumas muy escasas.

Por último, pese a su diversa extensión, los ingresos a cuenta de tierras, casas y otras propiedades inmuebles del concejo no solían revestir gran trascendencia al cederse con frecuencia como treudo enfitéutico perpetuo, sujeto a un canon fijo modesto⁸. El ansia roturadora característica del Quinientos no despertó tampoco un gran interés en los municipios por el arriendo o venta de terrenos. A fines del siglo xv y principios del xvi, ciertos concejos cedieron de forma periódica a vecinos el usufructo de terrenos tras su sorteo por parroquias o barrios a cambio de un treudo en dinero o especie. Estos tenentes gozaron de unas condiciones favorables de explotación, como demuestra el mantenimiento en Daroca durante toda la centuria de los cánones establecidos a principios del Quinientos o su supresión en Huesca en 1562 tras ciertas reivindicaciones de los procuradores de los barrios. Muchos concejos constataron la existencia de roturaciones ilegales por parte de los vecinos en las suertes y otros terrenos municipales incultos entre mediados del Quinientos e inicios del Seiscientos. Como solución, optaron por incorporarlos a sus ingresos tras pactar con sus detentadores la cesión del usufructo como treudo perpetuo.

Por lo común, los concejos analizados revelan durante el siglo xvi cierta inercia en la concepción de sus ingresos. La favorable coyuntura económica no fue aprovechada para aumentar su monto. En primer lugar, condicionados por una política de protección al consumidor de raigambre medieval y un claro deseo de potenciar la actividad económica, los municipios modelaron los beneficios de los principales corretajes y monopolios sobre alimentos básicos para contener el alza de precios típica de la centuria y sustentar una demanda creciente por parte de la población. Por este motivo, las pérdidas de los Pósitos en años de carestía fueron asumidas y los ingresos derivados de monopolios como la carne, el tocino o el pescado se estabilizaron al centrarse las pujas para su consecución en rebajas en el precio de venta del producto ofrecido por el arrendatario al público⁹. En segundo término, la recaudación municipal de sisas sin su sanción previa en Cortes

⁸ Inglada (1996), pp. 86-90 y 95-105, y Mateos (1997), p. 149.

⁹ Véanse las notas 4 y 13, así como Gómez Zorraquino (1987), pp. 57-69 y 157-161.

quedaba prohibida por el fuero «De prohibitione sisarum», aprobado por este Parlamento en 1398. Al disminuir las convocatorias de Cortes bajo el reinado de Felipe II, los ingresos de los concejos de realengo por este concepto descendieron. La vigencia de esta disposición y la marcada incidencia de sisas, monopolios y corretajes más lucrativos sobre los alimentos básicos frenaron muchos intentos de incrementar estos ingresos por los concejos hasta ver crecer su endeudamiento en las últimas décadas del siglo ¹⁰. Así, la Diputación del reino denunció la imposición ilegal en Daroca entre 1571 y 1576 de sisas sobre la venta de carne, trigo y harina. Los visitantes de la Orden de Calatrava constataban en 1590 que la villa de Alcañiz había aplicado sisas contra la normativa foral y sin licencia del rey.

Sobre este esquema dado, el creciente endeudamiento que muchos concejos comenzaron a padecer a principios del siglo XVII obliga a introducir nuevas fuentes de ingresos. En principio considerados «arbitrios» temporales, el declive económico municipal les otorgó un carácter permanente ¹¹. Consistían en monopolios sobre productos elaborados tales como la nieve, el tabaco, los naipes, el aguardiente, el jabón, el hierro o el carbón. Justificados en algunos casos por su carácter superfluo o perjudicial, la incidencia de otros en el consumo diario de la población era más que sobrada. Las derramas repartidas entre los vecinos ganaron también presencia en la contabilidad. Así se financiaron ciertas reformas urbanísticas o la incipiente asistencia médica estable introducida en las poblaciones aragonesas desde el segundo cuarto del siglo XVII, práctica que implicó en ocasiones la oposición de los estamentos privilegiados ¹².

La necesidad municipal de mayores ingresos desde fines del siglo XVI forzó a abandonar la favorable política de abastos aplicada en esta centuria, en especial sobre el pan y la carne, artículos que permitían una mayor detracción. Esta medida obligó a muchos concejos a sustituir el arriendo del abasto de carne por su administración al no hallar arrendatarios. Según se ha constatado en distintas localidades —Barbastro, Daroca, Zaragoza, Albarracín—, con las salvedades impuestas por las mayores carestías de trigo, la gestión se encaminó a drenar dinero desde el Pósito y la administración de la carne hacia la caja central para frenar su déficit perma-

¹⁰ Mateos (2000), pp. 457-458. Frente al reino aragonés, la adopción excepcional de sisas en Cataluña y Valencia se constituye en mera potestad regia o señorial. Véase Bernabé (1993), pp. 28-29.

¹¹ Como ejemplo, Inglada (1986), pp. 246-248 y 257.

¹² Otero (1994), vol. I, pp. 113-114, y Mateos (1997), pp. 153 y 470.

nente ¹³. En principio justificada como una devolución de préstamos de la caja central a las subsidiarias, su práctica creciente desde fines del siglo xvi e inicios del xvii corrió pareja al endeudamiento municipal.

Esta gestión municipal sobre las administraciones del trigo y la carne resultó muy útil para cobrar las sisas destinadas a pagar las fuertes demandas de la monarquía en el segundo cuarto del siglo xvii —servicio de 1626, contribuciones a la guerra de Cataluña (1640-1652)— ¹⁴. El mayor gravamen aplicado continuó durante la segunda mitad de la centuria en beneficio de la hacienda municipal tras cesar servicios y levass o volverse al sistema de arriendo. Junto con los arbitrios citados, algunos corretajes fijados sobre otros alimentos esenciales —vino, aceite— con un carácter temporal para completar estas contribuciones terminaron a veces incorporados como ingresos permanentes del concejo.

Expresión clara del declive financiero, nuevos impuestos fueron destinados a pagar pensiones o luir censales. Éstos contaban con precedentes desde el último tercio del siglo xvi, en especial en poblaciones bajo dominio laico o eclesiástico ¹⁵. Los problemas financieros de los concejos se mezclaban en estos casos —Escatrón, Codo, Fuentes, Malón, etc.— con los derivados de la bancarrota de sus señores, al introducirse en las concordias con los censalistas derechos y servicios sobre los vasallos. Con todo, la redefinición del marco impositivo municipal tiene lugar en Aragón de forma más amplia y sistemática desde principios del siglo xvii, en especial tras acaecer la expulsión de los moriscos en 1610. La adopción de impuestos para aliviar la deuda censal, tanto por concejos de realengo como de señorío, y su extensión a buena parte de los municipios con mayor peso específico dentro del reino revelan bien a las claras la magnitud del problema.

Entre dichas imposiciones, una opción era la fiscalidad directa ¹⁶. Consistía con frecuencia, como sucedía a fines del siglo xvi en los lugares de señorío, en la entrega por los vecinos de parte de su producción. Barbastro fijó ya en 1611 la cesión de una onceava parte de la cosecha de cereal, vino o aceite. En otras ocasiones los impuestos se distribuían en

¹³ Salas (1982), pp. 82-85, Mateos (1997), pp. 183-186, 293-299, 313-323 (2001) (s.f.b) y (s.f.c).

¹⁴ Véase la nota anterior y Colás y Salas (1978), pp. 151-168. En la Corona de Aragón, la concepción de las sisas como propios y arbitrios torna poco relevante su distinción, practicada en los estudios de municipios castellanos. Véase Bernabé (1993), pp. 28-29, AAVV (1988) y Gutiérrez Alonso (1997), pp. 197-199.

¹⁵ Abadía (1998), pp. 56-58, 195-198, 249-256, 282-283 y 294.

¹⁶ Salas (1992b), pp. 31, 49-50, Colás (1979), pp. 139-140, 209-213; Sanz (1991), pp. 69-85.

función de la hacienda particular. Bajo señorío calatravo, la villa de Molinos pactó con sus acreedores en 1644 repartir una tributación directa de 14.700 sueldos anuales por doce años para pagar pensiones. Más usuales en pequeñas poblaciones, los impuestos directos eran difíciles de recaudar debido al rechazo de los pudientes y a la pobreza de muchos vecinos. Estos problemas reducían la rentabilidad y continuidad de dichas cargas.

La segunda posibilidad era la fiscalidad indirecta¹⁷. Algunas ciudades en especial impusieron sisas «vecinales» para luir censales: Daroca las adoptó en 1617 tras tomar ejemplo de Calatayud. Con todo, la fuerte presión fiscal de la monarquía en 1628-1652 frenó estas iniciativas. En contraste, legitimados por la práctica consuetudinaria, diversos concejos —Jaca, Huesca, Zaragoza, Borja— afectados por la peste bubónica a mediados del siglo XVII sí introdujeron, tras su cese, sisas vecinales, aplicables a todos los estamentos, para recuperar los costes asistenciales derivados de la epidemia. Culminado su cobro en Zaragoza entre agosto de 1654 y febrero de 1661, el municipio aún dispuso en 1670 nuevas sisas destinadas a recaudar 170.000 libras en tres años y reducir su endeudamiento.

Junto a su mayor tradición, al estar ligadas a la fiscalidad real, las sisas eran más fáciles de recaudar. Como principal inconveniente, tanto si afectaban sólo a los vecinos pecheros como si incluían a los exentos, las sisas vecinales requerían la obtención previa de permisos temporales del rey o del Papa para salvar la normativa foral. Su carácter indirecto favorecía a los sectores acomodados y les ganaba el interés de las elites locales; pero no de los grupos sociales más modestos¹⁸. A consecuencia de este rechazo, representantes de labradores y artesanos se opusieron en Daroca en 1670-1672 y en Teruel en 1728 a las pretensiones concejiles de prolongar las sisas tras expirar las licencias para su aplicación.

Huelga decir que este variado espectro de imposiciones desató gran oposición al establecerse en un período de progresivo declive económico y empobrecimiento de amplios sectores sociales. Una respuesta clara fue la defraudación, con mayor fuerza en alimentos básicos muy gravados, como

¹⁷ Sanz (1997), p. 292, Mateos (1997), pp. 140-144 y (s.f.b). La aplicación de sisas tras el azote de la peste bubónica en Maiso (1982), pp. 176-180. Junto a la oposición del clero, Maiso destaca las dificultades de los concejos citados para recuperar los gastos ocasionados por la epidemia.

¹⁸ Véase la nota anterior y Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Real Acuerdo, Partido de Teruel, 1728, exp. 13. El interés de las elites locales por los impuestos indirectos en el siglo XVII se evidencia para las Coronas de Aragón y Castilla en AAVV (1988) y Gutiérrez Alonso (1997), pp. 209-210.

el pan y la carne, pero extensible a otros productos¹⁹. Basada en el cumplimiento de la normativa foral, la oposición de los estamentos privilegiados y en especial del clero constituyó un grave problema. Esta actitud forzó a Daroca a solicitar entre 1621 y 1666 la aprobación papal de sisas vecinales que recaían en exclusiva sobre los pecheros, cargas sancionadas en la concordia firmada con sus censalistas en 1673 para su aplicación continua con objeto de luir censales. La elevada detracción sobre los abastos esenciales aplicada por el concejo de Zaragoza le ganó no sólo continuas defraudaciones del clero regular, sino serios pleitos con el Cabildo metropolitano en la segunda mitad del siglo xvii que se saldaron con la obtención de licencias por Felipe V entre 1722 y 1724 para instalar sus propias carnicerías destinadas al clero secular y regular de Zaragoza.

Por último, queda por medir el efecto de este endeudamiento sobre los propios y comunales²⁰. Con el propósito específico de reducirlo, diversos municipios sancionaron en el Seiscientos la venta de terrenos de limitada extensión sin uso comunal. Otra opción era el acotamiento y arriendo de nuevas dehesas, práctica que costó a Albarracín graves enfrentamientos con las aldeas de su Comunidad ya en la primera mitad de la centuria. La cesión parcial o completa de los propios realizada por los concejos a sus acreedores en las concordias firmadas desde fines del siglo xvi en adelante extremó ambas posibilidades para garantizar el pago de pensiones o la luición de censales. No es casual que en el acuerdo suscrito por Alagón en 1639 con sus censalistas, éstos garantizasen el reparto de los quñones entre los vecinos al asumir los propios de la villa. Junto a los vínculos socio-económicos y las relaciones de poder, los usos colectivos sobre terrenos comunales y los acuerdos previos de tenencia en el caso de los propios delimitarían en cada localidad las condiciones de las privatizaciones y las posibilidades de acceso por parte del común.

Mejor definido al no verse afectados por la bancarrota nobiliaria, el proceso de privatización de comunales parece atenerse a dos fases en los concejos de realengo. Las suertes roturadas por vecinos a cambio de un treudo en dinero o especie sufren las consecuencias del endeudamiento municipal ya durante la segunda mitad del siglo xvii²¹. Al tiempo que

¹⁹ Véase la nota 13.

²⁰ Salas (1992b), pp. 28 y 39, Mateos (1997), p. 149 y (s.f.c.). La concordia firmada en 1639 por Alagón se conserva en una copia de 1669 en el Archivo Municipal de Zaragoza, Serie Factiva, Caja 136, doc. 17. Sobre la importancia de la coyuntura demográfica y el grado de endeudamiento de la hacienda municipal en estos procesos, consúltense, para Castilla, las apreciaciones de Bernal (1978), pp. 287-291, y de García Sanz (1980).

²¹ Inglada (1996), pp. 90-95, y Mateos (1997), pp. 429-432. Estimaciones sobre la población jornalera en el campo aragonés durante el siglo xviii, en Peiró (2002), pp. 42-51.

barrios y parroquias perdían control sobre el reparto de estos lotes, los concejos adoptaron un mayor rigor en el cobro de cánones que favoreció la conservación de las tenencias por los labradores solventes y su paulatina consecución por ciudadanos e infanzones rentistas. En ciertos municipios, la oligarquía optó por la perpetuación de las suertes: en Daroca lo hará en 1668 y 1670, poco antes de firmar en 1673 la concordia que confería a los censalistas el control sobre los propios de la ciudad. Incluso obtenidas las perpetuaciones de las parcelas con mayor tradición comunal por los estratos más humildes, las dificultades de pago propiciarán transferencias de este derecho de usufructo mediante venta o donación que debían contar con la sanción municipal. Esta vinculación de la tenencia, a veces ya perpetuada, de tierras comunales a los grupos más acomodados de la localidad no se dejará sentir en exceso en un período de atonía demográfica y débil presión sobre la tierra como la segunda mitad del Seiscientos. Sin embargo, unida a la enajenación de otros propios y comunales, contribuirá a aumentar la polarización social al crecer la población en el siglo XVIII y generarse un amplio sector de jornaleros sin tierra.

Con todo, es la bancarrota definitiva a fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII la circunstancia que decide a muchos concejos de realengo a vender comunales²². La guerra de Sucesión (1705-1715) constituye un período muy propicio al disparar su endeudamiento y facilitarse la aprobación de estas cesiones por las autoridades borbónicas al destinarse su importe a sufragar contribuciones militares. Calamocha ofrece un claro ejemplo al desprenderse de sus suertes: en 1711 de las ya cedidas en usufructo y en 1714 de las sorteadas entre los vecinos. Si bien los colonos vieron en 1711 garantizadas sus tenencias mientras pagasen el canon fijado a los nuevos dueños, los beneficiados de ambas ventas fueron medianos propietarios integrados en la oligarquía municipal. Con frecuencia, estos grupos acomodados de vecinos o forasteros exigieron a los concejos de la comarca, como garantía en caso de incumplimiento en el pago de las pensiones, la cesión en propiedad al censalista de bienes municipales: monopolios como el molino harinero o terrenos de propios o comunales. La firma de concordias entre estos concejos y todos sus acreedores marcaría el cese de estas transacciones al implicar a otros sectores sociales —como el clero, dueño de muchos censales— en el control de propios y comunales, así como al dictarse una serie de normas concretas para su gestión.

²² Inglada (1996), pp. 105-107, y Benedicto (1999), pp. 40-43 y 54.

2. LA EVOLUCIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL

A título preliminar, debo indicar que trazar la evolución de las haciendas municipales aragonesas en los siglos XVI y XVII resulta una tarea difícil, dado que éstas engloban una amplia diversidad de situaciones, poco conocidas hasta el momento. Con un mayor número de estudios realizados, los principales municipios marcan una pauta que puede cumplirse sólo de forma parcial en los núcleos más modestos. Con todo, considero que las líneas generales expuestas aportan una interpretación coherente de la gestión de los concejos y las razones de su quiebra durante el Seiscientos e inicios del Setecientos.

La política municipal conoce en el Quinientos un cambio significativo respecto a la Baja Edad Media al producirse una expansión del poder y control público. Fiel reflejo, los concejos ejecutaron muchos proyectos orientados a sustentar el desarrollo económico, mejorar las condiciones de vida de la población o asentar su poder simbólico y legal²³. Con este fin se crean nuevos regadíos o se amplían los ya existentes, así como se implantan sistemas para dotar de agua potable a lugares, villas y ciudades. Una ambiciosa política de abastos en beneficio del consumidor y sustento de la demanda interna reducirá los ingresos de los monopolios de venta y aumentará los gastos, sobre todo durante las serias carestías de grano padecidas a fines del siglo XVI. Los largos pleitos judiciales emprendidos sangraron de forma continua sus arcas. Manifestación pública de su poder, los municipios subvencionarán con esplendidez la erección de bellos edificios religiosos y civiles, con un especial énfasis en la Casa Consistorial, así como las celebraciones de las visitas reales y las ceremonias fúnebres en honor de miembros de la Casa de Austria.

En contraste, la fiscalidad real sigue un ritmo decreciente durante el siglo XVI²⁴. En primer lugar, por el estancamiento de los servicios concedidos por el reino a partir de las Cortes de 1510 en 200.000 libras: 156.000 —un 78 por 100— a cuenta de los municipios y 44.000 —un 22 por 100— de la Diputación. Al margen de donaciones personales al rey, la suma se mantuvo hasta las Cortes de 1585, que votaron 400.000

²³ Sobre el tema, Salas (1992b). La división de la hacienda municipal en varias administraciones resta relevancia a la exposición de porcentajes de gastos dentro de la caja central. Con todo, su examen más preciso para los siglos XVI y XVII puede apreciarse en Mateos (1997), pp. 205-250.

²⁴ Mateos (2000), pp. 454-464. Este estancamiento de los servicios resulta común en todos los territorios forales de la monarquía. Sobre el tema, Fernández de Pinedo (1990), y Fortea y Cremades (1993).

libras, y las de 1592 que, tras las alteraciones del año anterior, cedieron 700.000 libras. En ambos casos, la diferencia respecto del servicio ordinario fue sufragada por la Diputación mediante la contratación de censales. En segundo término, el descenso de convocatorias en la segunda mitad de la centuria (1554, 1565, 1585, 1592) redujo la presión fiscal real cuando el reino alcanzaba su mayor auge económico. Por el contrario, las 2.160.000 libras aprobadas en las Cortes de 1626 excedieron a la suma de todos los servicios votados entre 1518 y 1585.

Ahora bien, el reducido tamaño de los concejos aragoneses moderó los recursos disponibles, a la par que la propia inercia de su gestión y la normativa foral sobre sisas operaban en idéntica dirección. Inmersos en una euforia financiera, los concejos obviaron estas limitaciones y recurrieron al crédito para financiar sus proyectos, en especial durante la segunda mitad del Quinientos. La identificación de los censalistas con la oligarquía municipal favoreció este proceso y apartó todo intento de aprovechar la amplia oferta de censales para rebajar su tasa de interés, fijada en el 5 por 100. Consecuencia del creciente desfase entre ingresos y gastos, muchos concejos conocían serias dificultades a principios del siglo XVII²⁵. Caspe debía a sus censalistas 180.000 libras en 1611 y Barbastro 116.000 hacia 1620. Estas deudas no harán sino crecer como resultado de la fuerte presión fiscal de la monarquía en 1628-1652 y del endeudamiento municipal que forzó a contraer nuevos créditos para pagar pensiones atrasadas. Pese al cobro de impuestos para luir censales, los débitos de Caspe y Barbastro alcanzaban así las 200.000 y 150.000 libras hacia mediados del Seiscientos. Si la deuda de Zaragoza suponía 682.000 libras en 1641, diez años después se había incrementado en un 66,66 por 100, hasta sumar 1.136.623 libras.

En este contexto, pese a los intentos de las Cortes de 1626 y 1645-1646 por transferir a la Diputación parte de las contribuciones al aumentar los derechos aduaneros —10 por 100 del valor de la mercancía en 1626, 13 por 100 en 1646— y crear en 1626 un impuesto del 5 por 100 sobre la producción textil por quince años, la fiscalidad real desplegada entre 1628 y 1652 en Aragón debilitará en gran medida las precarias finanzas concejiles. Si bien su repercusión fue muy distinta entre los concejos al distribuirse las cargas según el obsoleto recuento poblacional de 1495 hasta efectuarse otro en 1646-1650, el esfuerzo de las principales villas y ciudades no ofrece dudas. Así lo revela el concejo de Daroca a través de su caja

²⁵ Colás y Salas (1977), pp. 162-163; Colás (1978), pp. 138-140 y 228, y Redondo (1977), pp. 118. Para una cronología del endeudamiento en la Corona de Castilla, Gutiérrez Alonso (1997), pp. 205-207.

central, la Procuraduría General. Excluidos los salarios y pensiones de censales, la evolución de sus gastos ordinarios restantes entre 1518 y 1702 se expone en el gráfico 1²⁶. Con un coste de 866.967 sueldos, servicios y contribuciones de guerra supusieron un 52,63 por 100 de estos gastos «diversos» en 1628-1652, su período de mayor apogeo.

Debido a su mayor potencial económico, la fiscalidad real recayó con más fuerza sobre Zaragoza al incluir ya en el Quinientos la solicitud de préstamos²⁷. Los débitos desde 1568 por este concepto sumaban 21.305 libras en 1603, condonados en su mitad por el concejo al requerir Felipe III este año un donativo. La presión de Felipe IV tras las Cortes de 1626, favorecida por su control del sistema electivo municipal, dará mayores frutos. El Consistorio prestará 50.000 libras en 1629, 1633 y 1636, otras 25.500 en 1638, 110.000 libras en 1643, 14.000 en 1644, 5.000 en 1645, 150.000 en 1649 y 88.000 libras en 1650. Demorada su redención por los tesoreros del monarca, los préstamos tras la guerra de Cataluña sumaron todavía un mínimo de 1.233.800 libras entre 1658 y 1684.

El peso de la fiscalidad regia y el endeudamiento de los municipios forzaron a éstos a acudir con asiduidad al préstamo, recurso que acrecentaba el peso de su deuda. Este proceso se evidencia en la evolución —véase el gráfico 2— de las pensiones pagadas sobre su deuda censal por la Procuraduría General de Daroca entre 1518 y 1702²⁸. Estos pagos ocasionaban un 29,86 por 100 de sus gastos ordinarios en 1518-1657 y un 23,05 por 100 en 1558-1600. En 1602-1627 sumaban ya un 45,61 por 100, un 47,86 por 100 en 1628-1652 y un 69,43 por 100 en 1653-1672. Tras conseguir el concejo rebajar la tasa de interés en 1670-1672 desde un 5 a un 3,12 por 100, suponían un 65,02 por 100 en 1678-1701.

Este proceso es avalado por estudios más puntuales de administraciones centrales municipales²⁹. Barbastro representa a fines del siglo XVI un caso extremo: las pensiones de censales generaban en 1587, 1598 y 1607 un 53,5 por 100, un 66 por 100 y un 72 por 100 de los gastos de la Bolsería. La práctica de cargar parte de sus costes a las aldeas de su Comunidad no libró a la Mayordomía de Albarracín de dedicar a este fin un 62,27 por 100 de sus gastos ordinarios en 1621-1654. Mejor librada salía Zaragoza, gracias al gran aumento de sus ingresos en el siglo XVII. Con todo,

²⁶ Mateos (1997), pp. 205-213 y 477-480.

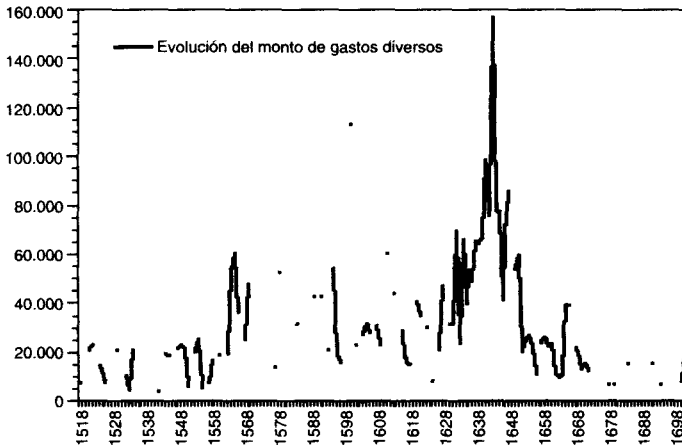
²⁷ Redondo (1977), pp. 110-111; Salas (1992b), pp. 52-53; Jarque (1993), y Sanz (1997), pp. 62-63.

²⁸ Mateos (1997), pp. 186-189, 200-204 y 473.

²⁹ Salas (1992b), p. 30; Sanz (1997), p. 362, y Mateos (s.f.c.).

GRÁFICO 1

*Procuraduría General de Daroca.
Evolución de los gastos diversos (1518-1702). (En sueldos)*



FUENTE: Archivo Municipal de Daroca, Actas Municipales, 1518-1702.

GRÁFICO 2

Evolución de las pensiones de censales pagadas por la Procuraduría General de Daroca (1518-1702). (En sueldos)



FUENTE: Archivo Municipal de Daroca, Actas Municipales, 1518-1702.

las pensiones suponían un 45,39 por 100 de los gastos ordinarios de la Mayordomía en 1640-1651 y un 64,91 por 100 en 1661-1675. Reducida la tasa de interés a un 3,12 por 100 en 1686, aún montaban un 58,83 por 100 en 1697.

Las dificultades financieras de los concejos plantearán a la minoría rectora desde los inicios del siglo xvii la conveniencia de atajar el constante recurso al crédito y aliviar su carga mediante la devolución de los préstamos o la reducción de sus réditos. Estas medidas desatarán inevitables conflictos de intereses³⁰. Una actitud común de la oligarquía era dar prioridad a la luición de los censales propiedad de los forasteros para preservar las rentas de la elite local. Cuando muchos prestamistas eran forasteros, por tanto, la luición de censales contaba con mayores posibilidades. Allí donde la oligarquía municipal sea propietaria de muchos censales, ésta podía limitar o retrasar su luición. Una característica común a muchos concejos —Huesca, Fraga, Albarracín, Daroca— será la transmisión mediante venta o donación de los censales propiedad de ciudadanos al clero, mejor dispuesto a aceptar una menor tasa de interés. Muchos censales fueron destinados en testamento a crear capellanías y otros legados píos, en beneficio por lo común de parientes, allegados, sirvientes o paisanos. La mayor solidez financiera de los municipios de realengo frente al señorío quedaba patente al especificarse ya en el siglo xvi y sobre todo en el siglo xvii la obligación de cargar «*en lugar de realengo, justo y seguro*» los censales que financiaban el legado para garantizar el pago de pensiones. Controlado por la minoría dirigente, el proceso de transmisión de la deuda censal pautará la evolución de las haciendas municipales durante la segunda mitad del xvii hacia su quiebra irremediable.

Entre sus consecuencias, el declive municipal propició una menor presión fiscal de la monarquía en la segunda mitad del siglo xvii, en especial tras asolar la peste bubónica el reino entre 1648 y 1654³¹. Con la excepción de Zaragoza, las demandas de servicios y donativos con destino a la defensa de Cataluña o la conquista de Portugal hallaron muy débil eco en los concejos³². Las Cortes aragonesas de 1677-1678 aceptaron esta situación

³⁰ Inglada (1986), pp. 72 y 97; Berenguer (1998), pp. 112-116; Mateos (1997), pp. 253-256, y (s.f.c.).

³¹ Maiso (1982), p. 177

³² Sanz (1997), pp. 60-63, 176-186, 223-235 y 277-298. Al igual que el reino y la Corona de Aragón, los restantes territorios forales conocerán un claro descenso de la fiscalidad real en la segunda mitad del siglo xvii frente a su mayor mantenimiento en Castilla. Véase Fernández de Pinedo (1990).

al votar un subsidio de 1.500 hombres por veinte años, reducidos a 700 en la convocatoria de 1684-1686 ante los problemas de percepción³³. Para recaudar este dinero, se decidió obviar la participación municipal. Con este fin, las Cortes de 1678 doblaron los derechos aduaneros hasta un 20 por 100 del valor de las mercancías importadas y exportadas —rebajados a un 10 por 100 en las Cortes de 1684—, así como añadieron un impuesto de un 5 por 100 sobre los textiles fabricados en el reino que se abolirá en 1684-1686. En compensación, estas últimas Cortes fijaron monopolios sobre la sal y el tabaco.

De igual modo, la mayor fiscalidad municipal desatada sobre los principales abastos no sólo perjudicó al consumidor, sino que limitó el control del concejo sobre las transacciones al proliferar la reventa y los tratos al margen del mercado público y sentirse la población legitimada por la normativa foral al fraude³⁴. La contracción de la labor protectora del municipio en ámbitos como la caridad o la educación, remitidos a las instituciones religiosas o la esfera privada, agudizó este proceso. Todo espacio dotado de jurisdicción propia, como los conventos, era un potencial centro de defraudación. Las circunstancias impondrán a los concejos estrategias de intervención más indirecta. Así, en defensa del consumidor, confiaron en arriendo a particulares parcelas de actuación sobre los intercambios antes reservadas al municipio, y las ciudades más importantes, como Zaragoza, vieron la necesidad de crear un mercado más homogéneo para la carne y el pan al poner fin a hornos, panaderías y carnicerías de concesión privilegiada o moderar sus prácticas que entorpecían los controles públicos sobre calidad y precio. Respecto al productor, favorecieron mediante donaciones la fundación privada de Montes de Piedad dedicados a prestar simiente a labradores y crearon otros con cargo a fondos municipales.

Esta pérdida de control público cobró gran intensidad en el mercado de cereal³⁵. Si bien la creación de Cámaras de Trigo permitió en el Quinientos una intervención más regular y constante en estas transacciones, el progresivo aumento de las existencias dotó a estas administraciones de gran fragilidad frente a las alteraciones de precios del grano. Pese a la contratación de censales, el sistema halló sus límites a fines de la centuria

³³ Solano (1987), pp. 33-34, y Sanz (1997), pp. 329-341.

³⁴ Salas (1982), pp. 83-85, y (1992b), pp. 28 y 39; Mateos (1997) (2001) (s.f.b) y (s.f.c).

³⁵ Mateos (1997), pp. 284-299 (2001) y (s.f.a). Sobre sus consecuencias, véanse las notas 4 y 37. La intervención discontinua y poca eficacia de los Pósitos, junto a la de la tasa, es resaltada en el proceso de integración del mercado castellano-leonés para el siglo XVIII por Llopis y Jerez (2001), pp. 49-59.

cuando fuertes oscilaciones de precios acarrearón serias pérdidas a los Pósitos. Se impuso reducir los stocks, proceso realizado en la primera mitad del siglo XVII a un ritmo variable según la demanda en cada población y sin descuidar los años de escasez más serios, así como extraer mayores beneficios para socorrer a la caja central municipal. El descenso general de los precios y el espaciamento de las carestías en la segunda mitad de la centuria consagró esta política, completada con el suministro prioritario a las panaderías —a las que se otorga mayor capacidad de autoabastecimiento para compensar las carencias del Pósito— y los repartos de grano forzoso entre la población para renovar el trigo almacenado. Resultado de estas transformaciones, parece gestarse en Aragón a lo largo del Seiscientos un mercado interno de cereal más abierto al reducirse la intervención de los concejos sobre los intercambios a la par que la economía del reino se orienta de forma más acusada a la producción y exportación de materias primas al periclitarse el capital mercantil aragonés y decaer la producción artesanal frente a la competencia francesa³⁶. Enmarcado en la progresiva integración del mercado aragonés en el ámbito estatal, este proceso tendrá continuidad en la centuria siguiente —Nueva Planta, leyes de libre comercio de granos en 1765— para consolidarse con la crisis del Antiguo Régimen.

3. LA NEGOCIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL

La principal modalidad de préstamo utilizada en el reino de Aragón durante la Baja Edad Media y la Edad Moderna era, como sucedía en el resto de la Península Ibérica y Europa occidental, el censo consignativo³⁷. Constituido en el Principado de Cataluña hacia mediados del siglo XIII, se expandirá por toda la Corona de Aragón en la siguiente centuria como opción al préstamo judío³⁸. Este censo perpetuo redimible o al quitar, denominado censal muerto o sólo censal, fue ganando terreno al censo violario —vitalicio y de un interés más elevado— en la segunda mitad del siglo XIV para convertirse en la principal fórmula crediticia en el reino y la Corona durante los siglos XV, XVI y XVII.

³⁶ Sobre el tema, Torras (1982); Fernández Clemente y Pérez Sarrión (1985), y AAVV (1990).

³⁷ García Sanz (1961); Escandell (1975); Clavero (1980), y Vázquez de Prada (1984).

³⁸ Turull (1990), pp. 464 y 484-485; Morelló (1995), pp. 299-302; Ferrero (1987), p. 94; Furió (1993), pp. 512-523, y García Marsilla y Saiz Serrano (1995), pp. 324-326.

Con motivo de alterarse las circunstancias económicas o el mercado de crédito, instituciones públicas y censalistas podían pactar y modificar las condiciones en vigor. Esta posibilidad se documenta ya en concejos de Aragón, Cataluña y Valencia durante la Baja Edad Media con objeto de sanear su hacienda o reducir la tasa de interés ³⁹. Un período muy proclive en Aragón a estos acuerdos fue el reinado de Fernando el Católico (1479-1516) al pretender varios concejos de realengo disminuir su deuda, acrecentada por la guerra de Cataluña (1462-1472), como paso previo a la expansión del poder municipal. Si Daroca procedió a luir censales entre 1484 y 1508, Fraga firmó una concordia en 1506 con sus acreedores que reducía a un 5 por 100 el interés de los censales contratados después de las Cortes de Teruel (1427-1428) y a un 2,5 por 100 los cargados antes de su celebración: esta medida rebajó en un 40 por 100 el monto de las pensiones.

La firma de concordias fue mucho más común durante el Quinientos en concejos de señorío, como resultado de la bancarrota nobiliaria ⁴⁰. Caso de excepcional precocidad es el de don Juan Jiménez Cerdán, señor de la baronía de Pinseque, quien suscribe con sus acreedores un acuerdo ya en 1512 que fuerza a éstos a rebajar sus pensiones —que rentaban en gran parte un 6,6 por 100— hasta el 2,5 por 100 de interés. Con todo, la segunda mitad de la centuria será la que contemple la quiebra de las grandes casas nobiliarias aragonesas y el embargo de sus haciendas por los censalistas tras la firma de sucesivas concordias. Muchos concejos bajo dominio laico se vieron afectados al introducirse en estos acuerdos nuevas contribuciones en dinero o especie sobre los vasallos para sufragar las deudas. Este proceder fue adoptado en señoríos eclesiásticos en apuros: el declive de la abadía de Rueda marcó así las concordias firmadas en 1591 y 1592 por Codo, Lagata y Escatrón.

Estos acuerdos establecían una evaluación de los ingresos anuales del concejo. Tras indicar en ocasiones la supresión de costes superfluos, estimaban el monto de los gastos fijos necesarios para sustentar la administración política y judicial local, limosnas y ceremonias arraigadas o los propios y comunales. Calculado el superávit teórico, se precisaba la cantidad destinada cada año a sufragar pensiones de censales, con prioridad hacia las deudas más atrasadas. Las concordias podían admitir demoras o can-

³⁹ Véase la nota anterior, así como Berenguer (1998), pp. 63-66. Para Daroca, el Archivo Municipal de Daroca, *Actas Municipales*, 1484-1508, que incluyen la contabilidad de la Procuraduría General.

⁴⁰ Abadía (1993), pp. 222-227, y (1998), pp. 143-146.

celaciones parciales en el pago de pensiones y rebajas temporales del interés. Como contrapartida, incluían contribuciones en dinero o especie sobre los vecinos con objeto de saldar deudas o luir censales, así como la dedicación de ciertos propios a garantizar el pago de las pensiones. Fijadas por un período concreto, el incumplimiento de las condiciones ligado a coyunturas adversas precipitaba a menudo su revisión. La incapacidad municipal para afrontar sus deudas conllevó la aprehensión completa de los propios por parte de los censalistas durante el siglo XVII y los inicios de la centuria siguiente.

La ya precaria situación de los concejos bajo dominio laico se agravará al ser los más afectados por la expulsión de los moriscos en 1610 en 127 localidades de Aragón. Ante el fuerte descenso de sus ingresos, se suceden los convenios entre estas poblaciones y sus acreedores. Las obligaciones relativas a la deuda censal municipal y señorial fueron incluidas en las cartas de población pactadas entre los señores y los nuevos colonos de estos lugares ⁴¹. Don Antonio Jiménez de Urrea, V conde de Aranda, aceptó así en estas concordias firmadas en diversos municipios sitos en sus dominios —Morés, Sestrica, Mesones, Nigüella, Almonacid de la Sierra, Lumpiaque, Urrea de Jalón— la deuda censal previa del concejo morisco a cambio de un canon anual en dinero para garantizar la ocupación de estos territorios y la percepción de las rentas señoriales.

La magnitud del problema provocado por la expulsión de los moriscos forzó a la monarquía a intervenir. Compuesta por consejeros de la Real Audiencia, una Junta de concordias mediaba ya en 1612 a través de comisarios reales en las disputas entre los acreedores y los nobles afectados por la expulsión sobre la gestión de su patrimonio, incluidas las rentas sobre los municipios bajo su dominio ⁴². Los acuerdos contemplaban la cesión parcial de estas rentas a los censalistas al resultar los nobles fiadores de los censales emitidos sobre concejos de nuevos convertidos, así como rebajas en su tasa de interés que alcanzaban el 25 por 100, 33,33 por 100 y 50 por 100 de su valor previo. Sometidos a revisiones, estos convenios pautarán la gestión de la hacienda nobiliaria durante el resto de la Edad Moderna. Ya las Cortes de 1626, amén de reducir al 5 por 100 la tasa

⁴¹ Atienza, Colás y Serrano (1998). Sobre el condado de Aranda, Abadía (2000) y Atienza (2000). Los sucesivos acuerdos que reducen la tasa de interés de los censales cargados sobre la Casa de Aranda muestran serias concesiones de los acreedores, así como la perduración del problema durante toda la Edad Moderna.

⁴² Abadía (1998), pp. 400 y 406-411, y Savall y Penen (1866), vol. I, pp. 469-472. Las rebajas del interés en censales sobre haciendas nobiliarias, en Gómez Zorraquino (1987a) pp. 203-210, y (1987b), pp. 31-35.

máxima de interés de la deuda municipal, decidieron suprimir la Junta de concordias y la figura de los comisarios, así como disponer nuevas condiciones para la negociación entre señores laicos y acreedores en las localidades antaño pobladas por moriscos.

Durante estas Cortes de 1626, diversos concejos reclamaron la disminución del servicio requerido por Felipe IV tras aducir su considerable endeudamiento. Otros añadían el remedio adoptado: la reducción del interés pagado a los censalistas, como hace Bolea en un tercio o Loarre en su mitad. Con una amplia gama de variantes, esta solución se impondrá⁴³. Al justificar Tamarite de Litera ante Zaragoza en 1638 la necesidad de pactar con sus acreedores residentes en la capital, citó incluso diversos casos —Albelda, San Esteban, Binaced, Quinto, Monzón— en que la negativa de los censalistas a reducir la tasa de interés conllevó un descenso aún más drástico de las pensiones —a la mitad o menos de su valor— al colapsarse las haciendas municipales por el monto de la deuda censal.

En esta tesitura, muchos concejos aprovecharán la estancia de Felipe IV en Aragón durante la guerra de Cataluña para recabar su apoyo en la firma de concordias. Las peticiones, remitidas al Consejo de Aragón o al mismo monarca, recuerdan los gravosos servicios prestados en el segundo cuarto del siglo XVII, así como los estragos de la peste bubónica. Fijados por un período variable, los acuerdos se atienen a las líneas ya esbozadas. Resultado de esta solución política, las concordias se multiplican en villas y lugares de Aragón entre fines de la década de los treinta y principios de los cincuenta⁴⁴. Por su parte, las Cortes de 1646 dictarán la reducción al 4,54 por 100 del interés previo exigido en los censales cargados sobre los concejos y la Diputación del reino.

Este proceso se completa en la segunda mitad del siglo XVII al incorporar a las ciudades, poco o nada afectadas por la expulsión de los moriscos y con mayores recursos económicos⁴⁵. En principio, éstas negocian con sus acreedores reducciones de las tasas de interés para cumplir con los

⁴³ Colás y Salas (1975), pp. 109-110. Las afirmaciones de Tamarite de Litera, en Archivo Municipal de Zaragoza, Actas Municipales, 1638, 30 de octubre, fol. 299r.

⁴⁴ Gómez Zorraquino (1987b), pp. 33-35; Sanz (1997), pp. 86 y 132-133, y Colás (1979), pp. 139-141. La rebaja del interés de los censales dictada por las Cortes de 1646, en Savall y Penen (1866), vol. I, p. 490.

⁴⁵ Redondo (1977), pp. 119-135; Jarque y Salas (1990); Rújula y Lafoz (1995), pp. 185-189; Mateos (1997), pp. 203-204 y (s.f.c.), y Berenguer (1998), pp. 134-145. Las concordias de Alcañiz, Tarazona y Huesca, Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Real Acuerdo, Sección Concordias, 1736, Partido de Tarazona, 1733-34, exp. 4, y Partido de Huesca, 1745, exp. 13.

pagos: Barbastro en 1657, Zaragoza en 1668, Daroca en 1670 y 1672, Albarracín en 1673. Su incapacidad financiera conlleva a fines de la centuria la rúbrica de acuerdos para regular la incautación de los propios por los censalistas: Daroca en 1673, Calatayud en 1683, Zaragoza en 1686, Barbastro y Borja en 1691. Con todo, algunas ciudades y villas lograrán retrasar estos acuerdos hasta el cese de la guerra de Sucesión: Alcañiz pactará en 1717, Tarazona en 1720, Huesca en 1724 y Fraga en 1728.

Solución final, las concordias conferían la gestión de las haciendas locales a «conservadores» nombrados por los censalistas tras garantizar éstos a los concejos el mantenimiento de su administración política y judicial, de los propios y comunales⁴⁶. La austera gestión de los conservadores, orientada a asegurar el pago de las pensiones y la luición de censales, no saneará con rapidez las endeudadas haciendas concejiles, que manifiestan una clara debilidad en la primera mitad del siglo XVIII. Al restringir el poder municipal, su labor propiciará pleitos constantes entre concejos y acreedores. Principal receptor de la deuda censal municipal en el Seiscientos, el estamento eclesiástico adquirirá durante el siglo siguiente un claro predominio en las Juntas de censalistas y asumirá un grado de influencia sobre la gestión municipal hasta entonces desconocido.

Fruto de esta situación, los frecuentes litigios sobre la gestión de los propios, la preservación de usos comunales o el control del mercado promoverán la intervención de la monarquía durante el siglo XVIII. Las penurias sufridas por los concejos aragoneses durante la guerra de Sucesión provocaron una oleada de peticiones ante el Real Acuerdo entre 1716 y 1740 para firmar o modificar concordias⁴⁷. Un decreto de Felipe V cancelará en 1743 todos los pactos en vigor y ordenará establecer otros nuevos. Ya en el reinado de Carlos III, el Consejo Real de Castilla asumirá en 1760 dirigir la gestión de los propios y arbitrios municipales en Aragón a través de la Contaduría General, creada a tal efecto.

4. CONCLUSIONES

Como conclusiones, destaca la profunda asimetría en la administración de la hacienda municipal en el reino aragonés durante los siglos XVI y XVII, caracterizada por el fuerte peso de sisas, monopolios y corretajes sobre

⁴⁶ Véanse las dos notas anteriores.

⁴⁷ Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Real Acuerdo, en especial la sección Concordias. Las disposiciones borbónicas sobre el tema, en Berenguer (1998), pp. 139-145.

alimentos básicos. En contraste con la tónica ascendente de la economía y la población, los ingresos se hallan presididos por un estancamiento propiciado por la normativa foral, pero inadecuado para afrontar el volumen creciente de los gastos durante la segunda mitad del Quinientos. El endeudamiento generado por este desajuste se consagra como el gran problema de los concejos durante el Seiscientos, agudizado por la presión fiscal de la monarquía en su segundo cuarto. Pese a la introducción de arbitrios y la mayor detracción aplicada a los alimentos de primera necesidad en un período de claro declive económico, los gastos siguieron creciendo en mayor proporción que los ingresos gracias al formidable aumento de la deuda censal. El resultado final será la quiebra de los concejos aragoneses, que alcanza a las principales villas y ciudades de realengo a fines del siglo XVII y principios de la centuria siguiente.

Lógica consecuencia de este proceso, la gestión de la hacienda municipal aragonesa presenta idéntica asimetría. Resulta innegable el aumento del control público por parte del concejo durante el siglo XVI con la asunción de significativos proyectos en aras de la expansión económica o el bien común —abastos, irrigación de tierras, suministro de agua potable— o plasmaciones físicas y simbólicas de su poder mediante el desarrollo de pleitos judiciales, fiestas y ceremonias o construcciones religiosas y civiles. La euforia financiera sustentará esta política mediante la compra de censales en beneficio de la oligarquía local rentista. En contraste, el declive financiero de sus haciendas obliga a los concejos en el Seiscientos a gravar más los monopolios de abastos, introducir nuevos arbitrios, recaudar sisas o derramas, así como vender propios y comunales. No siempre en sintonía, oligarquía municipal y estratos privilegiados adaptarán esta reorganización de la hacienda del concejo a sus intereses en perjuicio del común de la población. Así lo demuestra tanto el rechazo de los grupos privilegiados, amparados en la normativa foral, hacia las nuevas contribuciones como el interés de las elites por la aplicación de impuestos indirectos o por adquirir la tenencia y propiedad de comunales. Más allá del marco local, la quiebra municipal acarreará notables consecuencias para el Estado, la economía y la sociedad en su conjunto. Entre otras, moderará la política fiscal de la monarquía en el reino durante la segunda mitad del Seiscientos, potenciará la desigualdad económica y la polarización de la sociedad —en especial conforme avanza el Setecientos—, así como parece favorecer la progresiva integración del mercado aragonés en los ámbitos regional y estatal durante los siglos XVII y XVIII al reducirse el control público sobre los intercambios.

Por último, el endeudamiento resultante de esta gestión provocará desde fines del siglo XVI una serie de acuerdos entre concejos y acreedores. La magnitud del problema generado en los municipios bajo señorío laico por la expulsión de los moriscos en 1610, agudizado por el endeudamiento de la nobleza, forzará a la monarquía y a las Cortes aragonesas a mediar en su resolución. La firma de concordias se generalizará a lo largo del siglo XVII para consagrar, junto al palpable descenso de la tasa de interés aplicada sobre el censal, el progresivo control de los censalistas sobre los propios municipales. Al mismo tiempo, tiene lugar por medio de ventas y legados una paulatina transmisión de los préstamos cargados sobre los concejos desde la oligarquía ciudadana hacia el estamento eclesiástico, mejor dispuesto a aceptar una rebaja del interés. Ante la definitiva bancarrota de las haciendas municipales, los censalistas terminarán por incautarse de los bienes de propios y los concejos afrontarán como institución una grave pérdida de poder político y económico en el ámbito local en beneficio de sus acreedores, en especial del clero. Esta situación propiciará frecuentes discusiones entre la oligarquía municipal y los censalistas sobre la gestión de propios, la explotación de los comunales o el control del mercado que forzarán de nuevo la intervención de la monarquía borbónica durante el siglo XVIII.

BIBLIOGRAFÍA

- AAVV (1988): *Fiscalitat estatal i hisenda local (siglos XVI-XIX): funcionament i repercussions socials*, Palma de Mallorca, Institut d'Estudis Balearics.
- AAVV (1990): *Las relaciones económicas entre Aragón y Cataluña (siglos XVIII-XX)*, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses.
- ABADÍA, Alejandro (1993): *Señorío y crédito en Aragón en el siglo XVI*, Zaragoza, Institución Fernando el Católico.
- (1998): *La enajenación de rentas señoriales en el reino de Aragón*, Zaragoza, Institución Fernando el Católico.
- (2000): «El condado de Aranda en el siglo XVI», en Esteban SARASA y Eliseo SERRANO (eds.), *El conde de Aranda y su tiempo*, vol. I, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, pp. 191-206.
- ATIENZA, Ángela (2000): «El crédito privilegiado en la Edad Moderna: censos y censalistas del condado de Aranda», en Esteban SARASA y Eliseo SERRANO (eds.), *El conde de Aranda y su tiempo*, vol. II, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, pp. 135-150.
- ATIENZA, Ángela; COLÁS, Gregorio, y SERRANO, Eliseo (1998): *El señorío de Aragón (1610-1640). Cartas de población*, vol. I, Zaragoza, Institución Fernando el Católico.

- BENEDICTO, Emilio (1999): «La guerra de Sucesión en el corregimiento de Daroca», *Xiloca*, núm. 23, pp. 15-59.
- BERENGUER, Antonio (1998): *Censal mort. Historia de la deuda pública del Concejo de Fraga (siglos XIV-XVIII)*, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses.
- BERNABÉ, David (1993): «La fiscalidad de los territorios peninsulares de la Corona de Aragón durante la época de los Austrias», en José Ignacio FORTEA y Carmen María CREMADES (eds.), *Política y hacienda en el Antiguo Régimen*, Murcia, Universidad, pp. 15-31.
- BERNAL, Antonio Miguel (1978): «Haciendas locales y tierras de propios: funcionalidad económica de los patrimonios municipales (siglos XVI-XIX)», *Hacienda Pública Española*, núm. 55, pp. 285-312.
- CASEY, James (1983): *El reino de Valencia en el siglo XVII*, Madrid, Siglo XXI.
- CLAVERO, Bartolomé (1980): «Prohibición de la usura y constitución de rentas», *Moneda y Crédito*, 143, pp. 107-131.
- COLÁS, Gregorio (1979): *La bailía de Caspe en los siglos XVI y XVII*, Zaragoza, Institución Fernando el Católico.
- COLÁS, Gregorio, y SALAS, José Antonio (1975): «Las Cortes de 1626: el voto del servicio y su pago», *Estudios*, pp. 87-139.
- (1977): *Aragón bajo los Austrias*, Zaragoza, Librería General.
- (1978): «Repercusiones económicas y sociales del pago de la sisa de 1626», *Estudios*, pp. 151-168.
- ESCANDELL, B. (1975): «La investigación de los contratos de préstamo hipotecario ("censos"). Aportación a la metodología de series documentales», *Actas de las Primeras Jornadas de Metodología aplicada a las Ciencias históricas*, Santiago, Universidad, pp. 751-762.
- FERNÁNDEZ CLEMENTE, Eloy, y PÉREZ SARRIÓN, Guillermo (1985): «El siglo XVIII en Aragón: una economía dependiente», en Roberto FERNÁNDEZ (ed.), *España en el siglo XVIII*, Barcelona, Crítica, pp. 525-629.
- FERNÁNDEZ DE PINEDO, Emiliano (1990): *Haciendas forales y hacienda real*, Bilbao, Universidad del País Vasco.
- FERRERO, Remedios (1987): «Deuda pública municipal: los censales en el derecho histórico valenciano», *Palau*, 14, 2, pp. 91-102.
- FORTEA, José Ignacio, y CREMADES, Carmen María (eds.) (1993): *Política y hacienda en el Antiguo Régimen*, Murcia, Universidad.
- FURIÓ, Antoni (1993): «Crédito y endeudamiento: el censal en la sociedad rural valenciana», en Esteban SARASA y Eliseo SERRANO (eds.), *Señorío y feudalismo en la Península Ibérica*, vol. I, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, pp. 501-534.
- GARCÍA MARSILLA, Juan Vicente, y SAIZ SERRANO, Jorge (1995): «De la peita al censal. Finanzas municipales y clases dirigentes en Valencia en los siglos XIV y XV», en Manuel SÁNCHEZ y Antoni FURIÓ (eds.), *Colloqui Corona, municipis i fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana*, Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs, pp. 307-334.
- GARCÍA SANZ, Ángel (1980): «Bienes y derechos comunales. El proceso de privatización en Castilla durante los siglos XVI y XVII. El caso de tierras de Segovia», *Hispania*, núm. 144, pp. 95-127.

- GARCÍA SANZ, Arcadio (1961): «El censal», *Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura*, núm. XXXVII, pp. 281-310.
- GÓMEZ ZORRAQUINO, José Ignacio (1987a): *La burguesía mercantil en el Aragón de los siglos XVI y XVII (1516-1652)*, Zaragoza, Diputación General de Aragón.
- (1987b): *Zaragoza y el capital comercial: la burguesía mercantil en el Aragón de la segunda mitad del siglo XVII*, Zaragoza, Ayuntamiento.
- GUTIÉRREZ ALONSO, Adriano (1997): «Ciudades y monarquía. Las finanzas de los municipios castellanos en los siglos XVI y XVII», en Luis A. RIBOT y Luigi DE ROSA (eds.), *Ciudad y mundo urbano en la Época Moderna*, Madrid, Actas, pp. 187-211.
- INGLADA, Jesús (1986): *Estudio de la estructura socio-económica de Huesca y su comarca en el siglo XVII* (tesis de licenciatura inédita, Universidad de Zaragoza).
- (1996): «Propiedad comunal y prácticas comunitarias: garantía del bienestar económico y de la paz social en la Huesca de la modernidad», en Carmen FRÍAS (ed.), *Tierra y campesinado. Huesca (siglos XI-XX)*, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, pp. 69-124.
- JARQUE, Encarna (1993): «El precio de la fiscalidad real: poder monárquico y oligarquía municipal en Zaragoza (1628-1650)», en José Ignacio FORTEA y Carmen María CREMADES (eds.), *Política y hacienda en el Antiguo Régimen*, Murcia, Universidad, pp. 333-342.
- JARQUE, Encarna, y SALAS, José Antonio (1990): «La quiebra de la hacienda municipal de Barbastro a fines del siglo XVII», *Somontano*, núm. 1, pp. 103-110.
- LLOPIS, Enrique, y JEREZ, Miguel (2001): «El mercado de trigo en Castilla y León, 1691-1788: arbitraje espacial e intervención», *Historia Agraria*, núm. 25, pp. 13-68.
- MAISO, Jesús (1982): *La peste aragonesa de 1648 a 1654*, Zaragoza, Universidad.
- MATEOS, José Antonio (1997): *Auge y decadencia de un municipio aragonés: el Concejo de Daroca en los siglos XVI y XVII*, Daroca, Centro de Estudios Darocenses.
- (1998): «The making of a new landscape: town councils and water in the kingdom of Aragon during the sixteenth century», *Rural History*, 9, 2, pp. 123-139.
- (2000): «Información estadística y política fiscal en el reino de Aragón durante los siglos XVI y XVII», en Antonio Miguel BERNAL, Luigi DE ROSA y Francesco D'ESPOSITO (eds.), *El gobierno de la economía en el Imperio español*, Sevilla-Nápoles, Fundación el Monte-Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, pp. 447-470.
- (2001): «Municipio y mercado en el Aragón moderno: el abasto de trigo en Zaragoza (siglos XVI y XVII)», *Espacio, Tiempo y Forma*, IV, 14, pp. 146-179.
- (s.f.a): «En busca del trigo: política municipal y mercado de cereal en el reino de Aragón durante los siglos XVI y XVII», en *Actas del XVII Congreso de Historia de la Corona de Aragón* (en prensa).
- (s.f.b): «Municipio y mercado en el Aragón moderno: el abasto de carne en Zaragoza (siglos XVI y XVII)» (en prensa).
- (s.f.c): *Albarracín en el siglo XVII: municipio, hacienda y mercado* (trabajo mimeografiado, Instituto de Estudios Turolenses).
- MORELLÓ, Jordi (1995): «El sistema fiscal dels municipis catalans: l'exemple del Camp de Tarragona», en Manuel SÁNCHEZ y Antonio FURIÓ (eds.), *Colloqui*

- Corona, *municipis i fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana*, Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs, pp. 279-305.
- OTERO, Félix (1994-1995): *La Vila de Fraga al segle XVII*, 2 vols., Calaceite, Institut d'Estudis del Baix Cinca.
- PASSOLA, Antoni (1997): *La historiografía del municipio en la España Moderna*, Lleida, Universitat.
- PEIRÓ, Antonio (2002): *Jornaleros y mancebos. Identidad, organización y conflicto en los trabajadores del Antiguo Régimen*, Barcelona, Crítica.
- REDONDO, Guillermo (1977): «El siglo XVII zaragozano: crisis en la hacienda municipal», *Estudios*, pp. 109-140.
- RÚJULA, Pedro, y LAFOZ, Herminio (1995): *Historia de Borja. La formación histórica de una ciudad*, Zaragoza, Ayuntamiento de Borja.
- SALAS, José Antonio (1982): *La población de Barbastro en los siglos XVI y XVII*, Zaragoza, Institución Fernando el Católico.
- (1988): «La demografía histórica en Aragón, a estudio», *Jerónimo Zurita*, núm. 57, pp. 7-23.
- (1992a): «La evolución demográfica aragonesa en los siglos XVI y XVII», en Jordi NADAL (ed.), *La evolución demográfica bajo los Austrias*, Alicante, Institución Juan Gil Albert, 1992, pp. 169-179.
- (1992b): «Las haciendas concejiles aragonesas en los siglos XVI y XVII. De la euforia a la quiebra», en *Poder político e instituciones en la España Moderna*, Alicante, Instituto Juan Gil Albert, pp. 11-66.
- SANZ, Porfirio (1991): «La crisis de la hacienda municipal en la villa de Molinos», *Teruel*, núm. 82, vol. II, pp. 69-85.
- (1997): *Política, hacienda y milicia en el Aragón de los últimos Austrias entre 1640 y 1680*, Zaragoza, Institución Fernando el Católico.
- SAVALL, Pascual, y PENEN, Santiago (1866): *Fueros, observancias y Actos de la Corte del reino de Aragón*, 2 vols., Zaragoza, Imprenta de Castro y Bosque.
- SOLANO, Enrique (1987): *Poder monárquico y estado pactista (1626-1652)*, Zaragoza, Institución Fernando el Católico.
- TORRAS, Jaume (1982): «La economía aragonesa en la transición al capitalismo. Un ensayo», en *Tres estudios de Historia económica de Aragón*, Zaragoza, Universidad.
- TURULL, Max (1990): *La configuració jurídica del municipi baix-medieval. Règim municipal i fiscalitat a Cervera entre 1182 i 1430*, Barcelona, Fundació Noguera.
- VÁZQUEZ DE PRADA, Valentín (1984): «Protocolos notariales e historia económica: crédito, comercio e industria», en *Actas del II Congreso de Metodología Histórica Aplicada. La Documentación Notarial y la Historia*, vol. II, Santiago, Universidad, pp. 192-203.